

SOBRE EL "PROBLEMA VASCO"

Trataré de ser muy breve. Mi intención es salir al paso de un *aparente error* cometido habitualmente en relación a la situación social y política de Euskadi. Lo llamo sólo "aparente", y no real, por tratarse de un "error" premeditado, hecho convencional, cuya clara intención es provocar, respecto de la mencionada situación, una confusión que permita manipularla a distintos niveles, y que, por tanto, sólo *aparentemente* es un error. Esquemáticamente, su contenido podría ordenarse de la siguiente forma: 1. Una parte importante de la actividad y los acontecimientos *políticos* vascos son conceptuados como "terrorismo" (ya sea *directo*, como el que se atribuye a ETA, o *indirecto*, como el atribuido a quienes, sin participar en la lucha armada, apoyan su proyecto político). 2. Con ello se consigue encubrir la cualidad *política* de la actividad y los acontecimientos mencionados. 3. Luego, *el terrorismo* es convertido en "el problema vasco" por excelencia. 4. Y puesto que el *terrorismo* es "pura delincuencia común", "crimen", "mafia asesina" que nada tiene que ver con política (canti-nela habitual de los miembros del partido en el gobierno), el "problema vasco" es, a su vez, *despolitizado*. 5. Y, por tanto, su *solución* no tienen por qué ser *política*.

A lo que me gustaría responder: 1. Que la propia conceptualización como "terrorismo" de las actividades y los acontecimientos referidos constituye, ya, una toma de posición estratégica y defensiva (es decir, represiva) contra la posibilidad de un mayor desarrollo y fortalecimiento de la disidencia. 2. Que la tendencia a la ignorancia sistemática o a la negación abierta del carácter político —"nacional y *de clase*" (T. Erkizia)— del movimiento abertzale, se corresponde con la habitual práctica del Gobierno de tratar de eliminar, por el medio que sea (*Ley Antiterrorista*, GAL, pactos para el aislamiento y represión de fuerzas políticas contestarias, monopolio y manipulación de la información, presiones diversas a gobiernos extranjeros —Francia, Argelia— para organizar acciones contra refugiados políticos, etc.), cualquier disidencia política "peligrosa" (es decir, *real*) que rebase los límites de lo estrictamente parlamentario. Se asimila lo político a la participación parlamentaria en el gobierno*. La alternativa impuesta es: si la disidencia pretende ser *política*, entonces que se atenga a los cauces formales parlamentarios; pero, como ocurre a menudo, de esta forma, a fuerza de ser "política", quizá no sea ya más *disidencia*. 3. Que, "terrorismo" o no, las acciones mencionadas no constituyen, en modo alguno, lo que se ha dado en llamar —con el ánimo evidente de desviar la atención de la situación real— el "problema vasco"; que lo que el Gobierno Central

* En 1976, Althusser denunciaba la falacia de esta idea y su incongruencia con el carácter comunista de los partidos revolucionarios, en unas palabras que merecen ser recordadas: "La *vocación última* de un partido comunista —decía— no es *participar* en el gobierno, sino derribar y destruir el poder del Estado burgués [...] Un partido revolucionario no puede definirse, de ninguna manera, como un *partido de gobierno* [...]; no se define ni por su lugar en un Parlamento elegido ni por la ideología *realizada* en el aparato

llama “problema vasco” es, en todo caso, su problema, el *problema del gobierno* de Madrid (y en esto coinciden formaciones políticas tan críticas con el MLNV como EE o EA). 7. Resulta el colmo del cinismo llamar “*problema vasco*” a lo que a juicio de muchos vascos es, precisamente, una tentativa de su *solución*, cercenadas ya las demás vías posibles. Con ello, pretende el Gobierno que sus propios problemas sean también el *problema de los vascos*, sin atender a que el de éstos es justamente la política estatal de él. 4. Que el interés del Gobierno por presentar toda actuación política violenta como mera “delincuencia común” —ETA “asesina”, dicen—, radica en su obstinada voluntad de negarse al reconocimiento de la existencia de una *lucha política abierta*, que en ocasiones adopta —por ambas parte— formas violentas. (Como es sabido, el poder confiere *legalidad* al empleo de la violencia por sus detentadores, mientras que convierte en vulgares “asesinos” y “criminales” a quienes se oponen violentamente a él**.) Al Gobierno no le interesa reconocer el carácter político de esa lucha, porque hacerlo le obligaría a disputarla (también) *políticamente*, lo que está dispuesto a impedir a cualquier precio. Le interesa que tanto la propia ofensiva armada (en cierto sentido, puramente *defensiva*) como las acciones pacíficas comprometidas en la misma posición política de fuerza y el conjunto entero de la problemática real que las suscita, sean presentadas en el mayor grado de *despolitización* posible. 5. Que la puesta en práctica de este interés tienen el sentido de permitir al Gobierno ahorrarse el coste de una *negociación política* para la paz y la normalización de la situación en el conjunto de Euzkalerria. Una vez depolitizado todo, deformado, manipulado hasta hacerlo irreconocible, ya nada impide al Gobierno atender a la demanda “en sus justos términos”: ¡Nada de negociación política!: “Diálogo” sobre cuestiones *técnicas* relativas a “abandono de las armas y condiciones de reinserción” (R. Conde). Esto sí que es —por emplar una expresión reciente de F. González— “una broma macabra”.

Noviembre del 88

Pedro Fernández Liria

político (burgués) de Estado. Su *práctica política* es [y ha de ser, necesariamente] distinta a la de los partidos burgueses [...] *Formalmente*, un partido comunista puede parecer un partido como los demás cuando disfruta del derecho de tener representantes, por medio de las elecciones, en el Parlamento. *Formalmente* puede incluso aceptar esta *regla de juego* y, con ella, todo el sistema ideológico *político* burgués [...] Está obligado a tener en cuenta las *formas* de dominio burgués y a combatir a la burguesía *en el seno de sus propias formas de poder*, pero sin dejarse nunca atrapar por esas formas, que no son simples *formas* neutrales, sino *aparatos* que tienden a reproducir aquellas mismas relaciones de poder [...] Pero no podría entrar en el gobierno de un Estado burgués, gestionar los asuntos del Estado, porque su misión es *contribuir a su destrucción, preparar su extinción y su fin*.” Carecería de sentido, pues, para las fuerzas disidentes, la idea de restringir su *práctica política* a los límites parlamentarios.

** “La característica del Estado capitalista —decía Poulantzas en el 68— es que *detenta el monopolio de la represión física organizada*, al contrario que otras formaciones sociales, donde instituciones como la iglesia, el poder señorial, etc., tenían, paralelamente al Estado, el privilegio de su ejercicio. La represión física organizada reviste así un carácter propiamente político [*institucional*]. Se convierte en atributo exclusivo del poder político del Estado, su *legitimidad* participa en adelante de la del Estado; es ‘violencia constitucionalizada’ y está sometida ala reglamentación normativa del ‘Estado de derecho’. En este sentido, el Estado capitalista detenta el monopolio de la fuerza *legítima*, habida cuenta de las transformaciones de la legitimidad.”